

REGISTRO OFICIAL[®]

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETOS:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

351	Se reforma el Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025	2
352	Se reforma el Decreto Ejecutivo No. 125 de 12 de septiembre de 2025	7



No. 351

DANIEL NOBOA AZIN

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República dispone como deber primordial del Estado, entre otros, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza;

Que el primer inciso del artículo 141 de la Constitución de la República establece que el Presidente de la República “[...] *ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública*”;

Que los numerales 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen que son atribuciones y deberes del Presidente de la República, además de los que determine la ley: “[...] 3. *Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva*”; y, “[...] 5. *Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control*”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que “[...] *la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación*”;

Que el primer inciso del artículo 281 de la Constitución de la República establece que “[...] *la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente*”;

Que el numeral 1 del artículo 281 de la Constitución de la República establece como una de las responsabilidades del Estado para garantizar la soberanía alimentaria: “[...] *impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria*”;

Que el numeral 2 del artículo 281 de la Constitución de la República establece como una de las responsabilidades del Estado para garantizar la soberanía alimentaria: “[...] *adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos*”;

Que el numeral 3 del artículo 281 de la Constitución de la República establece como una de las responsabilidades del Estado para garantizar la soberanía alimentaria: “[...] *establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción*”;

Que el primer inciso del artículo 308 de la Constitución de la República señala que “[l]as actividades financieras son un servicio de orden público y tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país [...]”;

Que el artículo 310 de la Constitución de la República dispone que “[e]l sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sostenible, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros, orientando el crédito de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025, publicado en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 124 de 12 de septiembre de 2025, se creó el Programa Nacional de Microcrédito Productivo con el objeto de financiar actividades específicas del sector agroproductivo;

Que mediante Decretos Ejecutivos Nos. 60 de 31 de mayo de 2025 y 99 de 26 de junio de 2025 se modificó la estructura orgánica de la Función Ejecutiva, integrando las competencias de pesca y acuicultura al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;

Que mediante oficio Nro. MAGP-MAGP-2026-0206-OF, de 6 de marzo de 2026, se remitieron los informes técnicos y jurídicos correspondientes para la emisión del presente Decreto Ejecutivo;

Que mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2026-0178-O, de 30 de marzo de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió: “[...] dictamen favorable sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo de reforma al Decreto Ejecutivo 124 de 12 de septiembre de 2025, donde se amplía el alcance del ‘Programa Nacional de Microcrédito Productivo’”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República,

DECRETA:

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025 por el siguiente:

“**Artículo 2.-** Serán beneficiarios del Programa Nacional de Microcrédito Productivo los pequeños productores del sector agroproductivo, como el agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, que se encuentren registrados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y calificados financieramente por BanEcuador B.P., de conformidad con la normativa e instructivos que se emitan para el efecto dentro del segmento de microcrédito.”

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025 por el siguiente:

“**Artículo 3.-** Se otorgarán microcréditos a los que hace referencia este decreto ejecutivo para financiar exclusivamente las siguientes actividades:

1. Capital de trabajo

Se entiende por capital de trabajo el financiamiento destinado a cubrir los costos operativos, recurrentes y necesarios para la producción, agregación de valor y comercialización de bienes y servicios en los sectores de competencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como el agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. Su objetivo es garantizar la continuidad, sostenibilidad y eficiencia de las actividades productivas.

2. Activo fijo

Se entiende por activo fijo el financiamiento destinado a la adquisición, construcción, instalación o mejora de bienes duraderos que contribuyan al fortalecimiento, ampliación o modernización de las unidades productivas de los sectores a los que hace referencia este decreto ejecutivo, incluyendo las actividades complementarias de procesamiento y comercialización.”

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025 por el siguiente:

“**Artículo 5.- Seguimiento y evaluación.-** El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en coordinación con BanEcuador B.P., realizará el seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Microcrédito Productivo, en el ámbito de sus competencias, sobre la base de indicadores de gestión, resultados y cumplimiento de objetivos.”

DISPOSICIONES GENERALES

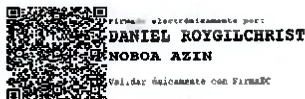
PRIMERA.- Los actos administrativos y operaciones financieras iniciados al amparo del Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025 mantendrán su vigencia y condiciones.

SEGUNDA.- En el Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de septiembre de 2025, donde se lea: Ministerio de Agricultura y Ganadería, se entenderá Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Cuenca, el 31 de marzo de 2026.



Daniel Noboa Azin
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Quito, 31 de marzo del 2026, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente



Dr. Pablo Enrique Herrería Bonnet
SECRETARIO GENERAL JURÍDICO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



No. 352

DANIEL NOBOA AZIN

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la República establecen como deberes primordiales del Estado: “5. *Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.*”;

Que el artículo 85 de la Constitución de la República dispone: “*La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.*”;

Que el artículo 141 de la Constitución de la República determina que el Presidente de la República: “[...] *ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública.*”;

Que los numerales 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen como atribuciones del Presidente de la República: “[...] 3. *Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva. [...] 5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.*”;

Que el numeral 11 del artículo 261 de la Constitución de la República prevé que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: “*Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.*”;

Que el artículo 275 de la Constitución de la República dispone que: “*El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la*

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”;

Que los numerales 1, 3 y 5 del artículo 284 de la Constitución de la República establecen: *“La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. [...] 3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. [...] 5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.”;*

Que el inciso primero del artículo 313 de la Constitución de la República señala: *“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. [...]”;*

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 254 de 02 de mayo de 2024, se creó el Comité de Optimización Energética, cuya finalidad es: *“[...] integrar, diseñar, promover y articular la política pública relacionada al uso de la energía, en los ámbitos de la seguridad pública, social y ambiental.”;*

Que los literales c) y f) del artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 254 de 02 de mayo de 2024, señalan entre las atribuciones del Comité de Optimización Energética, las siguientes: *“[...] c) Definir mecanismos de control para evitar el tráfico de combustibles y su uso en actividades de terrorismo o que atenten contra la seguridad pública del Estado, el contrabando de combustibles, el desvío interno, la especulación y la seguridad ciudadana; [...] f) Definir los lineamientos estratégicos que permitan, a través de una coordinación interinstitucional, establecer un plan de acción y hoja de ruta para la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas propuestas por el Comité.”;*

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 125 de 12 de septiembre de 2025 se dispuso **“ESTABLECER MECANISMOS DE COMPENSACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL PRECIO DEL DIÉSEL AUTOMOTRIZ”;**

Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 125 de 12 de septiembre de 2025 establece: *“Créese e impleméntese un mecanismo de compensación por la aplicación de la reforma del precio del diésel automotriz, a través de una transferencia monetaria mensual para los propietarios de vehículos cuya modalidad de transporte público sea intracantonal (urbano, combinado, rural), intraprovincial e interprovincial, que se determinen conforme los parámetros indicados en este*

Decreto Ejecutivo, desde las entidades públicas competentes. El mecanismo de compensación es de carácter económico y tiene como objeto proteger al usuario del transporte y evitar el alza de tarifas que el ciudadano paga por el uso de transporte público.”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 161 de 26 de septiembre de 2025 se reformó el Decreto Ejecutivo No. 125 de 12 de septiembre de 2025 en el que se sustituyó la Disposición General Décima por la siguiente: *“El mecanismo de compensación para los propietarios de vehículos cuya modalidad de transporte público sea intracantonal (urbano, combinado o rural) se aplicará por ocho meses; el Comité de Optimización Energética podrá evaluar la necesidad de prorrogar su aplicación por un tiempo máximo adicional de 4 meses. Para los propietarios de vehículos cuya modalidad de transporte público sea intraprovincial e interprovincial se aplicará por seis meses.”;*

Que mediante resolución Nro. COENER-004-2026 de 28 de marzo de 2026, el Comité de Optimización Energética (COENER) resolvió: *“Artículo 4.- Recomendar al señor Presidente de la República, acoger la propuesta de política pública sustentada en los informes técnico y jurídico presentados por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, y suscribir la propuesta de Decreto Ejecutivo que reforma el Decreto Ejecutivo No. 125 de 12 de septiembre de 2025.”;*

Que mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2026-0181-O de 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió dictamen favorable conforme establece el artículo 74 numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en los numerales 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República,

DECRETA:

Artículo 1.- Reformar el Decreto Ejecutivo No. 125 de 12 de septiembre de 2025, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 161 de 26 de septiembre de 2025, en lo siguiente:

- a) Sustitúyase la Disposición General Décima, por la siguiente:

“DÉCIMA.- El mecanismo de compensación para los propietarios de vehículos cuya modalidad de transporte público sea intracantonal (urbano, combinado o rural) se aplicará por ocho (8) meses; el Comité de Optimización Energética podrá evaluar la necesidad de prorrogar su aplicación por un tiempo máximo adicional de cuatro (4) meses. Para los propietarios de vehículos cuya modalidad de transporte público sea intraprovincial e interprovincial se aplicará por siete (7) meses.”

b) Sustitúyase la Disposición Transitoria Segunda, por la siguiente:

*“**SEGUNDA.-** Una vez culminado el período para la entrega de la compensación contemplada en el artículo 1 de este Decreto Ejecutivo y hasta treinta (30) días después, el Ministerio de Infraestructura y Transporte podrá realizar la transferencia monetaria a aquellos beneficiarios previamente identificados que no pudieron recibir el pago de forma oportuna por motivos ajenos a su voluntad, con cargo a los recursos disponibles. Solo se considerará a los propietarios de vehículos que consten previamente en el registro de beneficiarios correspondiente y que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos para la compensación.”.*

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los plazos previstos en el presente Decreto se entenderán vigentes desde la expedición del Decreto Ejecutivo No. 125, esto es, el 12 de septiembre de 2025.

Segunda.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Cuenca, el 31 de marzo de 2026.



Daniel Noboa Azin
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Quito, 31 de marzo del 2026, certifico que el que antecede es fiel copia del original.



Documento firmado electrónicamente

Dr. Pablo Enrique Herrería Bonnet
SECRETARIO GENERAL JURÍDICO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Mgs. Jaqueline Vargas Camacho
DIRECTORA (E)

Quito:
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto
Atención ciudadana
Telf.: 3941-800
Ext.: 3134

www.registroficial.gob.ec

IM/PC

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la información a la ciudadanía ecuatoriana.

"Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895"

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su publicación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.